

LA INCONVENIENCIA DE LEGISLAR LA CARRERA JUDICIAL COMO DOCUMENTO POLÍTICO EN CONTRA DEL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL

Sergio Salas Villalobos[∞]

El antecedente más remoto de la normatividad de la carrera judicial, data del año 2001, cuando el recordado congresista Daniel Estrada impulsó su proyecto de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial; el cual no prosperó por su característica impositiva ajena a las prácticas democráticas.

Luego de dicho intento, en el año 2003 con el impulso del CERIAJUS se retomó el tema, concluyéndose en el capítulo correspondiente a los Recursos Humanos, priorizar la legislación de la Carrera Judicial. Es entonces en que el tema abarcó dos escenarios; uno desde el Legislativo y otro dentro del propio Poder Judicial.

En cuanto al impulso interno (PJ) en el año 2004, se impulsó la Comisión Távara, compuesta exclusivamente por magistrados de todas las instancias, la que con apoyo de Iris Center (entidad cooperante auspiciada por USAID) elaboró el Proyecto de la Ley de Carrera Judicial. La principal característica de este proyecto es que incluyó un título previo en el que se identificaban los perfiles del Juez peruano; capítulo que no ha sido desarrollado por otra entidad, aunque con singular interés lo ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura. Este proyecto fue aprobado por Sala Plena y remitido al Congreso para su impulso.

Lamentablemente este intento fue desplazado por el proyecto del propio Congreso, que elaboró el documento político que ahora conocemos.

¿Es necesaria una Ley que regule la carrera judicial?

Existen dos tendencias; una a favor y otra en contra. Los sistemas judiciales iberoamericanos recogen la primera tendencia. Estados Unidos y Alemania, la segunda.

Los que apuestan por una legislación de la Carrera Judicial, se apoyan en la necesidad de reforzar la independencia judicial como principio democrático del sistema político de separación de poderes. Con ello, se pretende que los jueces estarán sujetos a una norma especial que los diferencie de los funcionarios públicos especiales. El problema es ¿Quién da la Ley? Obvio es que el Poder Judicial no; por que no tiene funciones legislativas. Por tanto, quien tiene la sartén por el mango es el poder político a través del Congreso. Ahora bien, ¿son seguros los mecanismos legislativos para garantizar

[∞] Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ex Presidente de la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia – JUSDEM - Perú. Profesor universitario en la cátedra de Derecho Judicial de la Universidad de Lima.

auténticamente la independencia judicial? En ninguno de los países iberoamericanos lo es; aunque en algunos de Centroamérica se piense lo contrario.

El problema básico de esta postura, es que no se ha podido definir qué es la Carrera Judicial. Por un lado se expresa que es una función pública especial y por lo tanto debe diferenciarse de las demás funciones públicas. Además, se expresa que es el desempeño del Juez en las distintas instancias jerárquicas a través del ascenso. Consideramos en cuanto a la segunda concepción, que se parte de un postulado obsoleto.

Reiteradamente hemos sostenido que en los sistemas judiciales de tipo piramidal jerarquizado, (como es el peruano) no existe una auténtica carrera judicial. Lo que hay es una competencia para llegar al más alto nivel y así, obtener una mayor remuneración. Eso no es carrera pública. Por lo tanto, estando a esta errada concepción, obvio es concluir que una ley que se proyecte en esta perspectiva, continuará deformando el sistema de los operadores judiciales.

En Europa continental, es otra la concepción. La carrera judicial se rige por un estatuto propio, el cual reconoce un sistema único de funciones y por tanto lo horizontaliza. Además de ello, en cuanto a políticas remunerativas, se reconocen una serie de beneficios como bonos por tiempos de servicios, asignaciones por funciones agregadas a la función jurisdiccional, consultorías sobre sostenimiento permanente de sus sistemas judiciales, etc. Con ello, no solo se democratiza la carrera judicial, sino que se genera motivación a aquellos jueces líderes que impulsan sus procesos de sostenimiento permanente.

Similar característica recogen los sistemas norteamericano y alemán. No requieren de una Ley especial. Son sus propios Poderes Judiciales los que elaboran estatutos del Juez, con lo cual se garantiza en absoluto el principio de independencia judicial, separándolo de la intervención política a través de una Ley en la que intervenga el Congreso. ¿Por qué el Perú no asumió este sistema?

Una de las características esenciales del éxito de las carreras judiciales, es la determinación del nivel de desempeño, lo cual solo se puede establecer mediante indicadores de medición válidos. La nueva Ley peruana considera indicadores subjetivos, ya que no se preocuparon nuestros legisladores de elaborar perfiles técnicos que midan dicho nivel. Ello, va unido además, con la eliminación de los procesos de ratificación, ya que si existen indicadores válidos de medición, será el propio sistema el que elimine a los jueces inidóneos sin recurrir a un sistema apreciativamente subjetivo. Sin embargo, y aún a pesar que ello implicaría una modificación constitucional, su práctica no sería políticamente conveniente al Congreso, por cuanto sería criticado por la sociedad. Es decir, se prefiere la aceptación popular como rédito político, a una norma técnica especial.

En suma, consideramos que no es prudente que los jueces entren al debate sobre los alcances de la nueva ley de carrera judicial ya que ello implicaría renunciar a los principios que la Justicia Democrática sustenta; la verdadera lucha por la independencia judicial como institución. ¿Qué nos queda? Seguir abriendo espacios de concertación, pero sobre todo sensibilizar a partir de los propios jueces, a toda la comunidad jurídica de visionar otros sistemas y extraer los beneficios de aquellos en los que se somete un Estatuto del Juez, por sobre una Ley política que hoy en día nos rige.